

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO

R.80/2022.



SALA SUPERIOR

TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/400/2022.

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/377/2021.

ACTOR:

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, Y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.

- - - Chilpancingo, Guerrero, veinte de octubre de dos mil veintidós.-----
- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca TJA/SS/REV/400/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto por el Licenciado -----, en su carácter de representante autorizado de las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y;

RESULTANDO

1. Mediante escrito de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, recibido el veinticuatro de junio del mismo año citado, en la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, compareció por su propio derecho ----- también conocida como -----, a demandar la nulidad de los actos consistentes en: "PRIMERO.- El aumento desproporcional de la base gravable que se observa entre la factura con folio 2000070778 de 23 de enero de 2020, en la que se observa la cantidad de \$1,093,937.00 (UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) y la factura 2100323310 en la que observa una base gravable de \$4,375,748.00 (CUATRO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ambas pertenecientes a la cuenta catastral número **0042-004-004-0004** sin que medie fundamentación o motivación alguna con respecto a

dicho incremento por parte de la autoridad responsable, sin que haya sido notificado procedimiento de re-avalúo en los términos de la LEY NÚMERO 266 DE CATASTRO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, sobre el bien de mi propiedad; por lo que también se señala como acto impugnado el siguiente: SEGUNDO: La emisión del avalúo, el procedimiento y acuerdos que fijó la REVALUACION catastral para efectos del impuesto predial respecto al predio de mi propiedad que se encuentra identificado por la responsable bajo la cuenta con clave **042-004-004-0004**, así como la factura por **concepto de pago del impuesto predial por el año 2021**, con número de folio **2100323871 de fecha 2021-03-12** que da a conocer la Secretaria Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero; todo ello amén de la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado que más adelante en el capítulo correspondiente se hará valer. TERCERO.- El cobro infundado, que se desprende de la factura con folio 2100323871 de fecha 12 de año 2021, referente al impuesto predial amén del aumento desproporcional de la base gravable entre los años 2020 y 2021, sobre el bien inmueble perteneciente a la cuenta catastral número **042-004-004-0004**. Observándose con claridad meridiana de toda la tramitología y de la liquidación que también serán objeto de impugnación, una indebida fundamentación y motivación en el acto de autoridad que hoy se impugna.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.

2. Por auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, admitió a trámite la demanda, con la que se integró el expediente número TJA/SRA/II/377/2021, ordenándose el emplazamiento a las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, a efecto de que dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, de conformidad con el artículo 58 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.

3. Por escritos de cuatro, siete y dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda, ofrecieron pruebas e hicieron valer las excepciones y defensas que estimaron procedentes.

4. Seguida que fue la secuela procesal, con fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, se llevó acabo la audiencia de ley, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia en el citado juicio.

5. Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, dictó sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de los actos impugnados, en términos del artículo 138 fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, *para el efecto de que las autoridades demandadas dejen insubsistente la factura con número de folio 2100323871 de doce de marzo de dos mil veintiuno, relativo a la cuenta catastral 042-004-004-0004, correspondiente al año fiscal dos mil veintiuno, del inmueble ubicado en departamento ----- de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, y procedan a recibir el cobro del impuesto predial correspondiente al año dos mil veintiuno, en el que se respete la base gravable por la cantidad de \$1,093,937.00 (UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) correspondiente al año fiscal dos mil veinte, contenida en la Factura de Pago Digital del Impuesto Predial con número de folio 2000070778 de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte.*

6. Inconforme con la sentencia definitiva de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, las autoridades demandadas a través de su representante autorizado interpusieron recurso de revisión ante la Sala Regional, en el que hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes; interpuesto el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la contraparte para el efecto a que se refiere el artículo 221 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y expediente principal a esta Sala Superior, para su respectiva calificación.

7. Calificado de procedente el recurso, se ordenó su registro en el libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca número TJA/SS/REV/400/2022, en su oportunidad se turnó con el expediente respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y;

CONSIDERANDO

I. Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal, que se susciten entre la administración pública estatal centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, órganos autónomos, los organismos con autonomía técnica y los particulares, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Guerrero, y en el caso que nos ocupa -----
-----, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, atribuidos a autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de que se dictó la sentencia mediante la cual se declaró la nulidad del acto impugnado, y al haberse inconformado las autoridades demandadas contra dicha sentencia, al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios, presentado en la Sala Regional Instructora con fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 192 fracción V y 218 fracción VIII, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia administrativa, tiene competencia para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; numerales de los que deriva la competencia de este Órgano Colegiado para conocer y resolver el recurso de revisión que hicieron valer las autoridades demandadas.

II. Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, fojas 82 y 83 del expediente principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el veinte de abril de dos mil veintidós, por lo que les surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del veintiuno al veintiséis de abril de dos mil veintidós, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional de origen el veintiséis de abril de dos mil veintidós, según se aprecia del sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa y de la certificación realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de origen, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 219 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado.

III. Que de conformidad con el artículo 220 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca TJA/SS/REV/400/2022, las autoridades demandadas a través de su representante

autorizada expresan en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación:

PRIMERO.- Causa agravios la resolución que mediante el presente escrito se recurre ya que viola en representadas lo previsto en el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; artículos 14 y 16 Constitucionales; Principio de Exhaustividad; Principio de Congruencia Jurídica Principio de Legalidad, el Principio de Igualdad de Partes, que debe de contener toda sentencia, pues en los dos considerandos señalados como SEGUNDO Y TERCERO, de este fallo, en el apartado en que causa agravios se lee lo siguiente:

SEGUNDO.-

Por su parte, el SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, hace valer la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 79 fracción IV del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, negando haber emitido el acto que se le atribuye; sin embargo, a juicio de esta sentenciadora, se considera que no es procedente ordenar el sobreseimiento que solicita la autoridad demandada en razón de que el artículo 25 fracciones XXIII, XXIV y XXV de Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, establece lo siguiente: "La Secretaría de Administración y Finanzas fungirá como recaudadora del Ayuntamiento y será la encargada de prestar el apoyo administrativo que requieran las Dependencias municipales; y entre las nuevas atribuciones son las de proponer y controlar las políticas en materia de informática, que deban seguirse para el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de cómputo y de comunicación interna, al frente de la Secretaria estará Un Secretario de Despacho, al que además de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Municipio Libre, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ...fracción XXIII "Administrar el Catastro Municipal", fracción XXIV 'Elaborar estudios, proyectos y programas para la mejora continua en la administración, control, integración y actualización del padrón catastral mediante la utilización de cartografía digital, fotogrametría aérea, y demás técnicas avanzadas para obtener información veraz y completa de los predios urbanos y rústicos, obteniendo su correlaciones de información técnica y administrativa," fracción XXV "Proponer las actualizaciones a las tablas de valores para la justa valuación de predios y construcciones", así como, el precepto legal 26 del Reglamento en mención, indica: "Que para el desempeño de sus facultades y funciones la Secretaria de Administración y Finanza contará con la Subsecretaría de Administración y la Subsecretaria de Hacienda y las siguientes Direcciones de Ingresos, de Catastro e Impuesto Predial,..." "por lo tanto, resulta evidente que dicha autoridad tiene una actuación directa en la emisión de actos relacionados con el impuesto predial, tal y como consta en el sello de recibido asentado en la Factura con número de Folio 2100247531 de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en virtud que,

dicha autoridad recibió el pago del impuesto predial que realizó la parte actora, que constituye el acto impugnado.

Así mismo, el ciudadano DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, en similares términos invocó la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista por los artículos 78 fracción XI y 79 fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, argumentado que la parte actora refiere que el doce de marzo de dos mil veintiuno, realizó el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, fecha en la que fue impresa la factura de pago que reflejó el nuevo valor catastral del inmueble propiedad de la actora y consta en el auto admisorio, y que el escrito de demanda lo presentó hasta el cuatro de junio de dos mil veintiuno, siendo que por acuerdo interno de este Órgano Jurisdiccional se determinó el inicio de recepción de demandas a partir del veintiocho de febrero del año en curso, por lo que estima que rebasa el plazo del numeral invocado.

De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados, se puede corroborar que el procedimiento ante este Órgano de Justicia Administrativa contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, en contra de los que no se promovió, demanda en los plazos señalados por el Código de la Materia, así mismo, establecen que procede el sobreseimiento del juicio cuando en su tramitación apareciera o sobreviniera alguna de las causales de improcedencia.

Ahora bien, a juicio de esta Sala Instructora, no se acreditan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 78 fracción XI, y 79 fracción II, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, en razón de que contrario a lo que sostiene la autoridad demandada el acto impugnado en el presente juicio lo constituye el incremento de la base gravable del inmueble propiedad del actor, y no los parámetros de valuación para realizarlo, por lo tanto, procede desestimar las causales invocadas por la demandada.

Aunado a ello, la existencia de los actos impugnados señalados como PRIMERO y TERCERO del escrito de demanda, se encuentran debidamente acreditados en autos, toda vez que el DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, agregó a su escrito de demanda, copias certificadas de la Factura Digital con número de folio 2100323871, de doce de marzo de dos mil veintiuno, respecto de la cuenta catastral del inmueble ubicado en Departamento ----- en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, en la que se determinó una base gravable por la cantidad de \$4,375,748.00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.); así como la Factura Digital con número de folio 2000070778 de veintitrés de enero de dos mil veinte, que contiene una base gravable por la cantidad de \$1,093,937.00 (UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), elementos de prueba visibles a folios 57 y 58 del expediente en estudio, a los que se les otorga eficacia probatoria de

conformidad en lo dispuesto por los artículos 46 y 135 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763; por lo tanto, será al entrar al estudio y resolución de la controversia planteada, cuando se determine si la autoridad demandada actuó dentro del marco de la legalidad o no.

Así mismo, resulta necesario precisar que no obstante la parte actora no probó en autos la existencia del acto impugnado marcado como SEGUNDO del Capítulo de Actos Impugnados de demanda el DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, al dar contestación a los conceptos de nulidad e invalidez de la actora, manifestó que no existe por parte de esa autoridad el avalúo o reevaluó, razón de que únicamente aplicó las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción vigente, lo que en criterio de la suscrita Sentenciadora constituye el reconocimiento expresado del acto mencionado, en términos de lo dispuesto por el artículo 134 fracción I Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763.

Causa afectación a mis representadas, toda vez que la Magistrada Instructora, al considerar por cuanto a las causales de improcedencia y sobreseimiento transgrede en contra de mi representada lo previsto en el artículo 137 fracción I del Código de la Materia, en razón de que únicamente asienta que la causal de improcedencia y sobreseimiento sujeta a estudio resulta INFUNDADA, de conformidad con los argumentos vertidos por el demandante en su concepto de nulidad, lo cual deja en estado de incertidumbre jurídica por cuanto a mi representada ya que del análisis de la redacción se advierte que solamente se pronuncia por cuanto a la causal prevista en el artículo 78 fracción XI, la cual no indica sobre los actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente; y la causa contenida en el artículo 79 fracción II.

Sin embargo, de dicha transcripción se advierte que la Magistrada Instructora, se enfoca solamente en una de las causales de improcedencia y sobreseimiento ofrecidas por mis representadas, dejando de considerar las demás, transgrediendo en contra de mis representadas Principios Constitucionales Fundamentales como lo son Legalidad, Seguridad Jurídica e Imparcialidad.

Además de que en el que el que suscribe sostiene que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el Artículo 78, fracción XI, la cual no establece acerca de los actos consentidos.

Apoya lo anterior, las Jurisprudencia números 60 y 61, visibles en las páginas 101 a 103 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, correspondiente a Salas y Tesis Comunes, que expresan:

“ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.” *Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo.”*

“ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.” *Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y*

administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.”

Cabe destacar que el artículo 137 fracción I, del Código de la Materia, prevé lo siguiente:

Artículo 137.- *Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente:*

I. El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su caso;

No obstante, en el presente asunto, el mismo demandante acepta haber consentido los actos en razón de que señala como la fecha en que tuvo conocimiento de los actos y del auto de radicación se advierte la fecha en que de manera extemporánea ingresó su demanda de nulidad ante ese Tribunal, siendo evidente que resulta declarar el presente juicio improcedente, toda vez que se actualiza una causal de indudable improcedencia.

Derivado de lo anterior, se tiene que en el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en los artículos 78, fracción XI, en relación con el arábigo 79, fracción II, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, pues la parte actora consintió tácitamente las normas que impugna, y por tal razón, ese Tribunal a su cargo, se encuentra imposibilitado para realizar pronunciamiento al respecto, debiendo declarar la validez.

CONTINUANDO CON LO MANIFESTADO EN EL CONSIDERANDO TERCERO DE LA SENTENCIA

TERCERO.-

Ponderando los argumentos y las pruebas apomadas por las partes en el presente juicio de nulidad, en sus correspondientes escritos de demanda y contestación de la misma, esta Instancia Regional considera que el único concepto de nulidad e invalidez del actor, es fundado y operante para declarar la nulidad de los actos impugnados señalados en el capítulo de Actos Impugnados de la demanda, en atención a las consideraciones jurídicas siguientes...

De la interpretación armónica a los preceptos Constitucionales y legales en comento, establecen que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, además de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Así mismo, el artículo 22 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, Número 492, establece que en los casos de excedencia o de predios no empadronados, de construcciones, reconstrucciones o de ampliaciones no manifestadas, la liquidación comprenderá cinco años y la base

para el cobro del impuesto se hará en la forma siguiente, y para el año en que transcurre, se cobrará el valor catastral determinado en la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676 y su reglamento, para el año inmediato anterior, el 80% del valor catastral actual determinado, para el segundo año el 70% del valor catastral actual determinado; para el tercer año, el 60% del valor catastral actual determinado; y, para el cuarto año, el 50% del valor catastral actual determinado.

Los preceptos legales y reglamentarios anteriormente transcritos establecen que se tendrá como base del impuesto el valor catastral del predio y de las construcciones, apartamento o local en condominio, los del régimen de tiempo compartido y multipropiedad, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley del Catastro Municipal vigente y su reglamento, además de que el valor catastral determinado y declarado por el contribuyente, a más tardar el último día del mes de febrero de cada ejercicio fiscal, el valor catastral deberá ser determinado y declarado por el contribuyente, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que ocurra alguna modificación de los predios o en su caso de las construcciones; si el contribuyente incumple con lo establecido en las fracciones I, II y III del presente artículo, o bien los valores declarados y determinados sean inferiores a los valores catastrales, la dirección o área de catastro municipal procederá a determinar el valor catastral del inmueble aplicando las tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobados por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal que corresponda, que la valuación catastral tiene por objeto determinar y actualizar el valor catastral de los bienes inmuebles ubicados dentro del Municipio de conformidad con la presente Ley y su Reglamento; que la Dirección de Catastro llevará a cabo la valuación y revaluación catastral de los predios de forma unitaria o masiva; que la valuación se debe realizar conforme a las disposiciones jurídicas establecidas la Ley de Catastro del Estado de Guerrero y su Reglamento, y además que se podrán generar los avalúos catastrales por predio, a petición de parte o de oficio, que servirán de base para el cálculo del impuesto predial; además que la valuación y revaluación catastral de los predios rústicos y urbanos se hará con aplicación específica de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, en la forma en que determine esta Ley y su Reglamento, así mismo, que la Dirección de Catastro, notificará de forma personal a los propietarios, poseedores o a los representantes legales toda clase de citatorios, acuerdos, resoluciones, avalúos y cualesquiera otras operaciones catastrales relacionadas con el inmueble en el domicilio señalado por escrito para oír y recibir notificaciones, o en el predio objeto de la operación en el caso de que no haya manifestado domicilio para oír o recibir notificaciones; además disponen que en caso de que se lleve a cabo la evaluación o revaluación masiva de bienes inmuebles, la notificación de los nuevos valores catastrales unitarios se hará mediante Edictos, que se publicarán por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Municipio, así como en la Gaceta Municipal correspondiente.

Los dispositivos de la Ley de Ingresos Número 638 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, correspondiente al año fiscal dos mil veintiuno, refieren que el impuesto predial se

causará y se pagará de conformidad con el objeto sujeto, bases, tasas o tarifas, época o pago, que serán objeto de este Impuesto la propiedad de predios urbanos y suburbanos baldíos, la propiedad de predios urbanos y sub-urbanos edificados entre otros; además señalan que son Sujetos de este Impuesto, las personas físicas y morales, que ostenten la propiedad o posesión legal y material de predios urbanos y suburbanos baldíos, rústicos; urbanos y suburbanos edificados; rústicos edificados; construcciones ubicadas en predios ejidales y comunales, así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad que revaluación catastral tiene por objeto actualizar el valor catastral a los bienes inmuebles ubicados dentro del Municipio, debiendo la Dirección de Catastro notificar de forma personal a los propietarios, poseedores, o a los representantes legales toda clase de citatorios, acuerdos, resoluciones, avalúos y cualesquiera otras operaciones catastrales relacionadas con el inmueble, en el domicilio señalado por escrito para oír y recibir notificaciones, o en el predio objeto de la operación.

En el caso sometido a estudio, una vez que esta Sala Regional, analizó los medios probatorios, mismos que al ser valorados, encontró que fueron suficientes para lograr los alcances probatorios que permitieran concluir que los conceptos de nulidad del actor resultan fundados y operantes para declarar la nulidad del acto impugnado de la demanda, consistente en: "PRIMERO.- El aumento desproporcional de la base gravable que se observa entre la factura con folio 2000070778 de 23 de enero de 2020, en la que se observa la cantidad de \$1,093,937,00 (UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), ambas pertenecientes a la cuenta catastral número 042-004-004-0004 sin que medie fundamentación o motivación alguna con respecto a dicho incremento por parte de la autoridad responsable, sin que haya sido notificado procedimiento de reevalúo en los términos de la LEY NÚMERO 266 DE CATASTRO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, sobre el bien de mi propiedad, por lo que también se señala como acto impugnado el siguiente:

"SEGUNDO: La emisión del avalúo, el procedimiento y acuerdos que fijó la REVALUACIÓN catastral para efectos del impuesto predial respecto al predio de mi propiedad que se encuentra identificado por [a responsable bajo la cuenta con clave 042-004-004-0004, así como la factura por concepto de pago del impuesto predial por el año 2021, con número de folio 2100323871 de fecha 2021-03-12 que da a conocer la Secretaría de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, todo ello, amén de la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado que más adelante en el capítulo correspondiente se hará valer."

"TERCERO.- El cobro infundado, que se desprende de la factura con folio 2100323871 de fecha 12 de marzo del año 2021, referente al impuesto predial amén del aumento desproporcional de la base gravable entre los años 2020 y 2021, sobre el bien inmueble perteneciente a la cuenta catastral número 042-004-094-0004"; los cuales resultan ilegales, porque en su emisión no se respetó la garantía de legalidad jurídica, que todo auto de autoridad debe contener, en términos de lo que dispone el 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo

138 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, toda vez que de la Factura Digital con número de folio 2100323871, de doce de marzo de dos mil veintiuno, respecto de la cuenta catastral 042-004-004-0004, del inmueble ubicado en Departamento ----- en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, en la que se determinó una base gravable por la cantidad de \$4,375,748.00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.); y a juicio de la suscrita Sentenciadora tiene razón la parte actora en el sentido de que la autoridad demandada no motivó ni fundó correctamente los conceptos contenidos en la referida Factura, siendo este el siguiente: UNIDAD: E48 Unidad de Servicio, CLAVE CONCEPTO: 93161600, CONCEPTO: 2021 (BIM1-BIM6) IMPUESTO PREDIAL; P.U \$17,065.44, DESCUENTO: \$2,047.86, SUBTOTAL: \$17,065.44, TOTAL: \$15,017.58, de donde se puede establecer con claridad que la autoridad demandada DIRECTORA DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, no citó los preceptos legales que sirvieron de base para emitir el acto impugnado, así como tampoco estableció que procedimiento utilizó para determinar las cantidades que se señalan en el acto impugnado que hoy se impugna, además de que no contiene los elementos básicos de los impuestos, en el sentido de que el impuesto predial se causará y pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas y periodo de pago, en términos de lo previsto por el artículo 12 de la Ley de Ingresos Número 638, para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.

De manera que si bien es cierto que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el deber de los gobernados de contribuir con los gastos públicos del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, tan bien es verdad, que el sujeto pasivo de la relación tributaria debe conocer de forma cierta de contribuir con esa obligación; en esa tesitura resulta procedente declarar la nulidad del aumento la base gravable contenida en la de la Factura Digital con número de folio 2100323871, de doce de marzo de dos mil veintiuno, respecto de la cuenta catastral 042-004-004-0004, en la que se determinó una base gravable por la cantidad de \$4,375,748.00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.); por lo tanto, al resultar nula dicha base gravable los demás actos también resulta procedente declarar la nulidad de los actos impugnados consistente en: "SEGUNDO: La emisión del avalúo, el procedimiento y acuerdos que fijó la REVALUACION catastral para efectos del impuesto predial respecto al predio de mí propiedad que se encuentra identificado por la responsable bajo la cuenta con clave 042-004-004-0004, así como la factura por concepto de pago del impuesto predial por el año 2021, con número de folio 2100323871 de fecha 2021-03-12 que da a conocer la Secretaria de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; todo ello, amén de la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado que más adelante en el capítulo correspondiente se hará valer; "TERCERO,- El cobro infundado, que se desprende de la

factura con folio 210032387 de fecha 12 de marzo del año 2021, referente al impuesto predial amén del aumento desproporcional de la base gravable entre los años 2020 y 2021, sobre el bien inmueble perteneciente a la cuenta catastral número 042-004-004-0004", al encontrarse debidamente acreditada la causal de invalidez prevista en el artículo 138 fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, que se refiere a revestir los actos de autoridad, sin que dicha declaratoria nulidad impida a la autoridad competente ejercer sus facultades fiscales de verificación y recaudación.

Sin que sea óbice a lo anterior, lo argumentado por la autoridad demandada DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, respecto a que la figura jurídica de estímulo fiscal no puede ser analizada conforme el artículo 31, párrafo primero, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el beneficio otorgado en el artículo 9, incisos f) y g) de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, no atiende a la capacidad económica de los sujetos obligados, sino al beneficio que genera a los contribuyentes que presentan condiciones, específicas, sin que el aludido estímulo incida en los elementos esenciales de la contribución, como son: objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, época de pago, ni otro que forme parte de su mecánica sustancial, agregando además que se hizo una actualización y para no afectar a los contribuyentes, optaron por reducir la tasa impositiva del 12 al millar por el 3.9 al millar, ello, con la finalidad de que los contribuyentes erogaran el mismo importe del año inmediato anterior.

Precisando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, define que el estímulo fiscal es el beneficio de carácter económico concedido por la Ley a un sujeto pasivo, con el objeto de tener ciertos fines de carácter municipal. Así también, señala, que son instrumentos que buscan motivar la realización de actividades determinadas, obteniendo los sujetos a los que ha dirigido un beneficio fiscal. Así mismo, el doctrinario -----, en su diccionario Contable Administrativo y Fiscal, define que los estímulos fiscales son aquéllos incentivos otorgados a los contribuyentes, estipulados en las leyes fiscales o mediante reglas de carácter general; normalmente para compensar los efectos que provocan ciertos fenómenos económicos o naturales o como aliciente de inversión en ciertas ramas de la economía: De igual forma, se tiene que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Diccionario Jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Diccionario Jurídico Mexicano, señala la siguiente definición: "Estímulos Fiscales. Beneficio de carácter económico concedido por la ley fiscal al sujeto pasivo de un impuesto con el objeto de obtener de él ciertos fines de carácter parafiscal". Por otra parte, existe una interpretación jurisdiccional que establece que el estímulo fiscal es un subsidio económico por la ley al sujeto pasivo de un impuesto, con el objeto de obtener de él ciertos fines parafiscales, que no representan un desvanecimiento de la obligación tributaria, sino que está asumida por el Estado, y así sucesivamente transcribe definiciones, que concluye que, en efecto, el estímulo es una prestación de carácter económico

que se en una deducción que el beneficiario puede hacer valer a su favor, respecto de un impuesto a su cargo. De ahí, que el estímulo fiscal, es una cantidad económica que se enfrenta a las cantidades del erario público que debe ser ingresada por concepto de contribuciones, es decir, se trata de una disminución del importe de la obligación tributaria surgida de la realización del hecho imponible de un tributo; criterio que no es compartido, por esta juzgadora, toda vez que se advierte que el actor erogó por concepto de impuesto predial correspondiente al año dos mil veinte, la cantidad de \$15,017.58 (QUINCE MIL DIECISIETE PESOS 58/100 M.N.), integrado por los conceptos siguientes: BASE GRAVABLE \$41,093,937.00 UNIDAD: E48 Unidad de servicio, CLAVE CONCEPTO: 93161600, CONCEPTO: 2020 (BIM1-BIM6) IMPUESTO PREDIAL, P.U: \$13,127.24, 2020 (BIM1-BIM6): IMPUESTO ADICIONAL 15% PRO-EDUCACION, P.U. \$1,969.06; DESCUENTO: \$236.20 TOTAL: \$15,017.59; así mismo, del análisis de La Factura de Pago del Impuesto Predial, con número de folio 2100323871 de doce de marzo de dos mil veintiuno, se observa que la autoridad demandada determina los siguientes conceptos: "UNIDAD: E48 Unidad de servicio, CLAVE CONCEPTO: 93161600, CONCEPTO: 2021 (BIM1-BIM6) IMPUESTO PREDIAL, P.U: \$17,065.44, DESCUENTO: \$2,047.86, SUBTOTAL: \$17,065.44, TOTAL: \$15,017.58; y una base gravable de \$4,375,748.00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), que no obstante que suprime el cobro de los impuestos adicionales, como consecuencia del incremento de la base gravable, aumento el impuesto predial; en ese contexto y al no existir constancias en autos con las que la autoridad demandada demostrara la existencia de un procedimiento de revaluación catastral al inmueble propiedad de la actora resulta, evidente que la nueva base gravable por la cantidad de \$4,375,748.00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), resulta ilegal.

En las narradas consideraciones jurídicas, y en ejercicio de las facultades que le otorgan a esta Sala Regional, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 467 y el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, se decreta el sobreseimiento del juicio por cuanto a la autoridad demandada H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, al encontrarse debidamente acreditada la causal prevista en el artículo 79 fracción IV del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763; y se declara la nulidad de los actos impugnados consistentes en: "PRIMERO.- El aumento desproporcional de la base gravable que se observa entre la factura con folio 2000070778 de 23 de enero de 2020, en la que se observa la cantidad de \$1,093,937.00 (UN MILLÓN NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) y la factura 2100223310 en la que observa una base gravable de \$4,375,748.00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ambas pertenecientes a la cuenta catastral número 042-004-004-0004 sin que medie fundamentación o motivación alguna con respecto a dicho incremento por parte de la autoridad

responsable, sin que haya sido notificado procedimiento de reavalúo en los términos de la LEY NUMERO 266 DE CATASTRO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, sobre el bien de mi propiedad; por lo que también se señala como acto impugnado el siguiente: SEGUNDO: La emisión del avalúo, el procedimiento y acuerdos que fijó la REVALUACIÓN catastral para efectos del impuesto predial respecto al predio de mi propiedad que se encuentra identificado por la responsable bajo la cuenta con calve 042004-004-0004, así como la factura por concepto de pago del impuesto predial por el año 2021 con número de folio 2100323871 de fecha 2021-03-12 que da a conocer la Secretaría de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero; todo ello, amén de la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado que más adelante en el capítulo correspondiente se hará valer. TERCERO.- El cobro infundado, que se desprende de la factura con folio 2100323871 de fecha 12 de marzo del año 2021, referente al impuesto predial amén del aumento desproporcional de la base gravable entre los años 2020 y 2021, sobre el bien inmueble perteneciente a la cuenta catastral número 042-004-004-0004", atribuido a los SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, en el expediente alfanumérico TJA/SRA//377/2021, incoado por la ciudadana ----- al actualizarse la causal de invalidez prevista por el artículo 138 fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, relativa a la omisión de las formalidades esenciales que deben de revestir los actos de autoridad; y en términos del artículo 140 del Código de la materia, el efecto de la presente resolución, es para que la autoridad demandada deje insubsistente la Factura con número de folio 2100323871 de doce de marzo de dos mil veintiuno, relativo a la cuenta catastral 042-004-004-0004, correspondiente al año fiscal dos mil veintiuno, del inmueble ubicado en Calle Departamento ----- de esta Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, y procedan a recibir el cobro del impuesto predial correspondiente al año dos mil veintiuno, en el que se respete la base gravable por la cantidad de \$1,093,937.00 (UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al año fiscal dos mil veinte, contenida en la Factura de Pago Digital del impuesto Predial con número de folio 2000070778 de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, y de resultar diferencias a su favor se realice la devolución correspondiente.

SEGUNDO.- Ahora bien, resulta violatorio lo considerado por la Magistrada de esa Sala, para determinar la nulidad de los actos emitidos por mi representada, por la supuesta falta de motivación y fundamentación, así como las razones particulares causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de los actos, además la competencia por parte de quien emite los actos, señalando los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en el artículo 16 Constitucional, sin embargo, resulta evidente el favoritismo para demandante, ya que la aplicación de los principios resultan aplicables solo para conveniencia de quien demanda y no de las demandadas, transgrediendo en contra

de mis representadas el principio de igualdad de partes.

Así pues, el cobro realizado por el demandante fue emitido en base a ordenamientos legales específicos previstos en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, número 638, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Es de señalarse a ese H. Tribunal de Justicia Administrativa, que **infundado** resulta ser lo considerado por la Magistrada Actuante, al argumentar que se transgrede en contra de la actora lo previsto en el artículo 16 Constitucional, sin embargo, tratándose de un acto realizado a voluntad del gobernado y dentro de la legislación catastral vigente, es decir que los preceptos que facultan al Municipio para cobrar el impuesto predial, son previstos en la Ley de Ingresos número 638 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

De lo anterior, efectivamente, las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción sufrió modificación acorde a derecho el cual se encuentra debidamente fundado y motivado; asimismo, el pago realizado por el contribuyente es el mismo al del año inmediato anterior, el cual no le ocasiona perjuicio alguno su patrimonio del demandante.

Contrario a lo que manifiesta la Magistrada de la Primera Sala, la reforma que sufrió las tablas de valores son acorde a derecho, ya que del Segundo análisis que realice ese H. Tribunal al Decreto número 640, por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción, publicado el 25 de Diciembre del 2020, advertirá que, en los **considerandos tercero y cuarto** de la exposición de motivos, se plasmó literalmente lo siguiente: “Que para la elaboración de las Tablas de Valores Catastrales que servirán de base, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con lo que establece el artículo 25 fracciones I, II, III y IV del Reglamento de la Ley número 676 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, la Secretaría de Administración y Finanzas en Coordinación con la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, realizó un estudio de mercado, sobre el suelo urbano y construcciones con el fin de actualizar los valores de los predios, que durante 15 años no se habían actualizado, siendo valores desproporcionados a la realidad, por lo que se hace necesario acercarse lo más que se pueda al valor real o de mercado, en virtud de que las operaciones inmobiliarias que se presentan contienen los valores muy por arriba de lo que muestran las tablas catastrales; es importante señalar que para no incrementar las contribuciones inmobiliarias se propone la reducción de la tasa impositiva considerada la más alta del país que ha sido del 12, para ahora ser solo del 3.9 al millar anual para el ejercicio fiscal 2021 y que en la propuesta de la Tabla de Valores Unitarios de suelo y construcción que servirán de base, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, va enfocada en cumplir el mandato constitucional en término del Artículo quinto transitorio de la reforma que tuvo el artículo 115 de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de Diciembre del año 1999, que marcaba como plazo el ejercicio fiscal del año 2002 para equiparar los valores catastrales a los de mercado y en

contraparte reducir la tasa impositiva para la determinación del impuesto predial”; asimismo, se acredita que los actos de los cuales se duele la parte actora se encuentran debidamente fundados y motivados.

Por otra parte, se tiene que el artículo 9 incisos f) y g) de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021, no es vulneratorio del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de los principios de equidad y legalidad tributaria, y que para su mayor comprensión se trae a la vista el artículo 31, fracción IV, Constitucional, el cual señala lo siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos:

IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Ahora bien, la fracción IV del artículo 31 Constitucional, contiene las siguientes garantías:

1. Las contribuciones deben destinarse al gasto público de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio.
2. Deben ser proporcionales y equitativas.
3. Deben estar establecidas en Ley.

Al efecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en la Jurisprudencia de la fuente del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 187-192 primera parte, página 113, lo siguiente:

“PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.”. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar

una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.

Conforme al criterio anterior, la **proporcionalidad** radica básicamente, en que los sujetos pasivos deben de contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva; y para que el principio de proporcionalidad permita que los sujetos pasivos contribuyan a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, los tributos deben fijarse de manera que las personas que obtengan ingresos elevados, tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos.

La Jurisprudencia invocada concluye en que la **proporcionalidad** se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, para que en cada caso el impacto sea distinto, no solo en cantidad, sino al tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que deba encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos.

Sin embargo, no debe de perderse de vista que la aplicación de los criterios anteriormente expuestos, deben de centrarse en un ámbito tanto de justicia fiscal como del gobernado, toda vez, como se ha dicho, se está en presencia de un precepto constitucional que contiene al mismo tiempo distintos derechos, pero también la obligación individual pública de los gobernados de contribuir para los gastos públicos de los diferentes niveles de gobierno: Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios.

Ahora bien, como se dijo con antelación, resulta ser infundado el argumento de la Magistrada Instructora, en atención a los requisitos de proporcionalidad y equidad, ya que de ninguna forma se está transgrediendo lo dispuesto por los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Apoya lo anterior, la Tesis con número de registro 2022996 de la Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“IMPUESTO PREDIAL. AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020, QUE PREVE UN BENEFICIO FISCAL PARA LOS CONTRIBUYENTES CUYOS INMUEBLES ESTÁN UBICADOS FUERA DE LOS LÍMITES URBANOS Y SUBURBANOS SEÑALADOS EN EL PLANO DE VALORES DE TERRENO PARA DICHO MUNICIPIO, NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. Hechos: *Las autoridades recurrentes señalan que el beneficio fiscal contenido en el artículo 48 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2020, consistente en la aplicación del factor del 0.80 sobre el monto del impuesto predial que les corresponde pagar a los contribuyentes cuyos inmuebles se encuentran ubicados fuera de los límites urbanos y suburbanos señalados en el Plano de Valores de Terreno para dicho Municipio, no incide en la mecánica del tributo, porque se*

aplica una vez que el impuesto predial es determinado, de manera que al no incorporarse a los elementos de la contribución, no le son aplicables los principios de justicia fiscal establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al artículo 48 citado, que prevé el beneficio fiscal aludido, no le son aplicables los principios de justicia tributaria.

Justificación: **Lo anterior, porque el estímulo fiscal mencionado no tiene relevancia impositiva en el impuesto predial, pues no se asocia a alguno de los elementos esenciales de esa contribución –objeto, base, tasa o tarifa y época de pago–, porque se materializa a través de una disminución en la cantidad resultante del cálculo del tributo y, por ende, no se adhiere a aquéllos ni integra su mecánica.**

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

En ese orden de ideas, la figura jurídica de estímulo fiscal no puede ser analizada conforme al artículo 31, párrafo primero, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el beneficio otorgado en el artículo 9, incisos f) y g) de la Ley de Ingresos Municipal vigente, **no atiende capacidad a la capacidad económica de los sujetos obligados, sino al beneficio que genera a los contribuyentes que presentan condiciones específicas; sin que el aludido estímulo incida en los elementos esenciales de la contribución, ni en otro que forme parte de su mecánica sustancial;** de ahí, lo infundado de los argumentos.

Sirve de sustento, la Jurisprudencia número 2002148, de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2, página 1243, cuyo rubro y texto es el siguiente:

ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA EL AÑO 2011 Y EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO EN MATERIA VEHICULAR A LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LA MISMA ENTIDAD. NO PUEDE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. El beneficio en cuestión constituye un estímulo fiscal que no tiene relevancia impositiva en el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de donde surge el deber de pago, ya que no incide en alguno de sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa, ni integra su mecánica, pues lo único que se pretende con su otorgamiento es apoyar la economía familiar mediante la entrega en dinero de un porcentaje del valor del vehículo respectivo para sufragar los costos que conlleva su uso; por tanto, al no medir la capacidad contributiva de los sujetos obligados ni pretender impedir que se cause el impuesto respectivo, dicho beneficio no puede analizarse a la luz de los principios de justicia tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que no impide que su regularidad constitucional pueda examinarse al tenor del artículo 1o. de la Constitución Federal.

Ahora, concerniente al argumento de la actora consistente en que en el artículo 12 de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, contemplan conceptos no definidos y amplían el objeto del Impuesto; dicho argumento resulta ser **inoperante.**

Siendo entonces que, de acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios que ha emitido en materia fiscal, que para el efecto de restituir únicamente en la parte que considere excesivo el pago del 2021 al del 2020, y no así en forma total, es decir, los Órganos Jurisdiccionales **no deben liberar a los contribuyentes en forma total de la obligación a la cual se encuentran sujetos**; pues en caso, de conceder dicha solicitud se causaría un detrimento económico a la hacienda municipal, además que tratándose de la contribución impuesto lo que se pondera es la **capacidad contributiva, y que en el caso en concreto la parte actora realizó tanto en el ejercicio fiscal 2020 y 2021 el mismo pago el Impuesto Predial, es decir, no existe perjuicio a su patrimonio; de ahí, que no es viable que se le exima de pago ni tampoco que se realice la devolución solicitada.**

En efecto, **infundado** resultan ser las manifestaciones vertidas por la parte actora, ya que contrario a lo que manifiesta, en ningún momento esta autoridad dejó de observar lo dispuesto en el artículo 16 en razón de que esta autoridad no efectuó ningún procedimiento de revaluación, por lo que previo a manifestar lo infundado de su argumento, es importante precisar a ese Tribunal, lo siguiente:

De conformidad con los artículos 115, fracción IV, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 178, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los Ayuntamientos tienen la facultad de proponer a las legislaturas las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, y que para su mayor comprensión se cita lo siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

*“Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, con forme a las bases siguientes:
[...].*

IV. [...].

*Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, **propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.**
[...].*

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO

*Artículo 178. Los Ayuntamientos son competentes para:
[...]*

XI. Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos municipales, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;

[...]

De lo anterior, se aprecia que los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia y con plena libertad configurativa propondrán a las legislaturas estatales las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria (predial), las cuales revisten una importancia fundamental ya que impactan la base gravable de la contribución.

Efectivamente, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en principio, aquellos conceptos de la Hacienda Municipal que quedan sujetos al régimen de libre administración hacendaria, tal como lo ha sostenido el Máximo Tribunal de la Nación, en el sentido de que la Hacienda Municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos de los Municipios y que, por su parte, la libre administración hacendaria debe entenderse como un régimen establecido en la Constitución Federal, tendiente a fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre administración y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo éstos los que de mejor manera y en forma más cercana las conocen, pueden priorizar la aplicación de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra razón, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.

Ahora bien, de entre aquellos conceptos en particular que forman la Hacienda Municipal, afectó al régimen establecido por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendientes a fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, están las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

De lo anterior, se advierte que la A quo, antes de entrar al estudio de fondo, debe valorar las causas de sobreseimiento e improcedencia, asimismo, valorar, motivar y fundar, sus argumentos y consideraciones, así como tomar en considerar(sic) las constancias de autos y de forma clara, precisa y lógica, a fin de dictar resolución definitiva; de lo cual se advierte que el presente fallo viola directamente los preceptos 4, 26, 78, 79, 128, 129 y 130 fracciones II y IV del Código de la de materia, como se aprecia en toda la sentencia recurrida, en el entendido que la Sala responsable no respeta los principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, Imparcialidad, Congruencia y Exhaustividad; asimismo, no funda ni motiva sus argumentos, así pues no entra al fondo del asunto de acuerdo a las constancias que obran en el presente juicio que nos ocupa.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 143, volumen 97-02, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto dicen:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.”

En concordancia con las disposiciones legales transcritas, es evidente que la sentencia de ocho de noviembre del dos mil veintiuno, fue dictada en contravención a ellas, ya que la Magistrada fue omisa en realizar un pronunciamiento de todas y cada una de las cuestiones que fueron sometidas a su conocimiento, es decir, no realizó un examen exhaustivo de la contestación de demanda, así como de las causales de improcedencia que fueron ofrecidas por mis representadas, ya que de haberlo hecho se habría percatado que el presente juicio es improcedente.

Asimismo, es aplicable al caso, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cincuenta y cinco del tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone:

“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudir a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.”

Es claro precisar que la sentencia que se impugna resulta ilegal, ya que es contraria a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, puesto que refleja la falta de un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio, razón suficiente para revocar la sentencia impugnada y decretar el sobreseimiento del juicio.

Resulta aplicable por analogía la Tesis que a la letra dice:

“EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: "Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los significados destacados, con miras a su aplicación al documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de consistencia argumentativa.”

De lo anterior se advierte, que el Juzgador responsable debe interpretar la demanda en su integridad, así como causales de improcedencia y sobreseimiento y las constancias que obran en autos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y en su caso si es procedente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a derecho.

Asimismo, debió haber explorado las causales de improcedencia por ser de cuestión de orden público cuyo análisis puede efectuarse en cualquier instancia sin importar que las partes la aleguen o no, circunstancia que omite tomar en consideración la A quo, dictando una sentencia ilegal.

Además, se advierte que la Magistrada responsable viola en perjuicio de mis representadas los preceptos invocados con antelación; asimismo, no agotó el principio de exhaustividad, al no examinar y valorar las causales de improcedencia y sobreseimiento, conforme a derecho, es decir, la Magistrada de

la Causa, no se pronuncia legalmente, en lo que refiere a las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas en el presente juicio, por lo que, solo se basa en los argumentos vertidos por la parte actora, tal y como se observa en la sentencia que se recurre.

De lo cual, me permito manifestar a Usted, **ad quem**, que mis representadas actuaron conforme a derecho toda vez que, en el presente juicio se acredita plenamente que la Magistrada resolutora, al dictar la sentencia, transgrede lo dispuesto por los artículos 4, 26, 74, 75, 128, 129 y 130 del Código de la materia, en razón de que suple las deficiencias de la queja a favor de la parte actora, figura que no se encuentra regulada en el Código de la Materia; toda vez que, solo se basa que mis representadas al emitir los actos reclamados por el actor, no son emitidos por autoridad mismos que se hacen sin la debida fundamentación y motivación, por lo que en ningún momento se le transgrede en su contra derecho fundamental alguno, por lo que se debe confirmar la validez de los actos impugnados por haber sido emitidos conforme a derecho.

Por lo que respecta a lo señalado por la magistrada, en donde indica que **"...es para que la autoridad demandada deje insubsistente la Factura con número de folio 2100323871 de doce de marzo de dos mil veintiuno, relativo a la cuenta catastral 042-004-004-0004, correspondiente al año fiscal dos mil veintiuno, del inmueble ubicado en Calle ----- de esta Ciudad de Acapulco, de Juárez, Guerrero, y procedan a recibir el cobro del impuesto predial correspondiente al año dos mil veintiuno, en el que se respete la base gravable por la cantidad de \$1,093,937.00 (UN MILLÓN NOVENTAS Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al año fiscal dos mil veinte, contenida en Factura de Pago Digital del Impuesto Predial con número de folio 2000070778 de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, y de resultar diferencias a su favor se realice la devolución correspondiente..."**

Cabe aclarar que para ejecutar lo anteriormente descrito, las demandadas se encuentran imposibilitadas para realizarlo, puesto que para aplicar dicha modificación, resultaría necesario emplear una ley anterior a la actual, tal es el caso que se ordena se emita el cobro del impuesto predial correspondiente al año 2021, respetando la base gravable correspondiente al año fiscal 2020, resultando que para ambos años existen leyes de ingresos distintas, siendo la LEY NÚMERO 638 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 y la LEY NÚMERO 437 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, respectivamente, y sobra decir que a la fecha de hoy ya existe una ley de ingresos distinta a las dos anteriores, siendo esta última para el ejercicio fiscal 2022.

Apoya lo anterior la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, que nos señala:

ARTICULO 183.- No se podrá recaudar ninguna cantidad por concepto de estén basados en una ley o decreto emanados del Congreso del Estado y sancionad por el Ejecutivo del Estado de Guerrero.

1. El servidor público que realice erogaciones que no estén previstas en las leyes correspondientes, incurrirá en responsabilidad administrativa y responderá con su patrimonio por las afectaciones realizadas. Si las irregularidades se tipifican como enriquecimiento ilícito, será sancionado conforme lo que determine la ley de la materia; y,
2. El año fiscal correrá del primero de enero al treinta y uno de diciembre.

Siendo entonces que esta autoridad no puede aplicar una ley de ingresos pasada para un ejercicio fiscal actual, siendo el caso que se nos exige aplicar la base gravable determinada por la LA LEY NÚMERO 437 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 a un impuesto que está determinado por un ejercicio fiscal diferente y que a cuya ley corresponde LEY NÚMERO 638 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

Ahora bien, si la intención de esta resolución es que se le respete una calidad determinada por una base gravable, cabe destacar que si bien existe una variación entre las bases gravables de los ejercicios fiscales 2020 y 2021, también es destacable que la cantidad pagada por el concepto de impuesto predial resulta ser la misma, tal como podrá observar en las documentales que ya obran dentro del expediente, por lo que, sin contar con lo anterior, fuera posible realizar dicha modificación, la cantidad a pagar por la parte actora sería prácticamente la misma.

Ahora bien, la exigencia para respetar la garantía de audiencia al aquí actor fue dada, en el entendido que se realizó conforme a derecho, y de manera voluntaria por parte del demandante por lo que en ningún momento se transgredieron las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica al actor; asimismo, manifiesto que acto emitido fue realizado por autoridad competente, como ya lo manifesté en líneas que anteceden.

En las relatadas consideraciones es procedente se revoque la sentencia impugnada, en razón de que, no existe congruencia jurídica por parte de la instructora y no fueron analizadas conforme a derecho ni actualizadas las causales de improcedencia sobreseimiento, simplemente la sentencia combatida nunca desarrollo la lógica jurídica y la valoración objetiva de todas y cada una de las pruebas y constancias que integren este Juicio, máxime cuando su estudio es de oficiosa y preferente por ser de orden público e interés social.

En efecto, como podrá de las constancias que obran en el expediente, queda demostrado que la Magistrada de la causa, por la falta de congruencia jurídica legalidad y exhaustividad, ha transgredido el orden normativo en tal consideración solicito a ustedes Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre y emitan otra debidamente fundada y motivada, dictando el sobreseimiento del presente juicio o en su defecto se emita otra en la que se declare la validez del acto impugnado.

IV. En resumen, argumenta el representante autorizado de las autoridades demandadas que le causa agravios la resolución recurrida, en virtud que viola en perjuicio de sus representadas los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de congruencia jurídica, legalidad e igualdad de partes.

Que le causa afectación toda vez que la Magistrada Instructora al considerar por cuanto hace a las causales de improcedencia y sobreseimiento, transgrede en perjuicio de sus representadas lo previsto en el artículo 137 fracción I del Código de la materia, al desestimar la causa de improcedencia y sobreseimiento, en razón de que únicamente asienta que resulta infundada, y solamente se pronuncia por cuanto hace a la prevista en el artículo 78 fracción XI del Código de la Materia, la cual no indica sobre los actos que hayan sido consentidos, así como la contenida en el artículo 79 fracción II.

Que resulta violatoria la declaración de nulidad por una supuesta falta de fundamentación y motivación, porque aplica de forma clara los principios a conveniencia de la demandante.

Que el artículo 9 incisos f) y g) de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, para el ejercicio fiscal 2021, no vulnera el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que el cobro realizado, fue con base en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Que es infundado el argumento de la Magistrada Instructora, porque en ningún momento se transgreden los principios de proporcionalidad y equidad a que se refieren los artículos 16 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que la figura del estímulo fiscal no puede ser analizado conforme al artículo 31, párrafo primero fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que el beneficio otorgado en el artículo 9, inciso f) y g) de la Ley de Ingresos Municipal vigente, no atiende a la capacidad económica de los sujetos obligados, sino el beneficio que genera a los contribuyentes que presentan condiciones especiales.

Que los órganos jurisdiccionales no deben liberar a los contribuyentes en forma total de la obligación a la cual se encuentran sujetos.

Que contrario a las manifestaciones vertidas por la parte actora, la autoridad en ningún momento dejó de observar lo dispuesto en el artículo 16, en razón de que no efectuó ningún procedimiento de revaluación.

Que de conformidad con los artículos 115 fracción IV, antepenúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 178 fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los Ayuntamientos tienen la facultad de proponer a las legislaturas las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Finalmente expone que al dictar la sentencia definitiva, la Magistrada resolutora transgrede lo dispuesto por los artículos 4, 26, 78, 79, 128, 129 y 130 fracciones II y IV del Código de la materia, en razón de que no respeta los principios de legalidad, seguridad jurídica, imparcialidad, congruencia y exhaustividad, y como consecuencia, es contraria al artículo 17 Constitucional.

Que las autoridades se encuentran imposibilitadas para dar cumplimiento a la sentencia definitiva, porque para aplicar dicha modificación, resulta necesario emplear una ley anterior a la actual, al ordenarse realizar el cobro del impuesto predial correspondiente al año dos mil veintiuno, respetando la base gravable correspondiente al año fiscal 2020, contraviniendo con ello el artículo 183 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que prohíbe recaudar impuestos o contribuciones, sin estar basados en una Ley o decreto emanados del Congreso del Estado y sancionados por el Ejecutivo del Estado de Guerrero.

Que se cumplió con la exigencia de respeto a la garantía de audiencia al actor, porque el acto impugnado fue realizado por autoridad competente y de manera voluntaria por el demandante.

Ponderando los motivos de inconformidad expresados en concepto de agravios por el representante autorizado de las autoridades demandadas, a juicio de esta Sala Superior revisora, resultan infundados e inoperantes para revocar la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por las siguientes consideraciones.

Contrario a lo argumentado por el recurrente, esta Sala Colegiada estima que al dictar la sentencia definitiva impugnada, la Magistrada realizó el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento que hicieron valer las autoridades demandadas en sus respectivos escritos de contestación de demanda, como se advierte del considerando SEGUNDO de la resolución en estudio, que por una parte determina que no se actualiza la relacionada con los artículos 78 fracción XI, en relación con el 79 fracciones II y IV del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, que hicieron valer el Secretario de Administración y Finanzas y Director de Catastro del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y por otra, decretó el sobreseimiento del juicio en relación con el Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con fundamento en la fracción IV del artículo 79 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, que se refiere a la inexistencia del acto combatido atribuido a la referida autoridad.

Además, los razonamientos expuestos por la Juzgadora primaria mediante los cuales desestima la causa de sobreseimiento invocada por el Secretario de Administración y Finanzas y el Director de Catastro e Impuesto Predial, no fueron controvertidos, razón por la cual esta Sala revisora se encuentra impedida para reexaminarla, en razón de que no es suficiente el simple señalamiento de que le causa agravios, sino que es indispensable que se dé cumplimiento a los mínimos requisitos de instancia de parte, que el artículo 220 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, impone y describe como la obligación de expresar las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho que se estimen violados.

Lo que es así, porque los procedimientos jurisdiccionales tienen por objeto garantizar el principio de certeza jurídica, al desarrollarse mediante etapas en las que cada una de las partes tenga la misma oportunidad de acreditar sus pretensiones y defensas de tal forma que, es en el escrito de contestación de demanda, o en su caso, de ampliación a la misma, en términos del artículo 60 fracción VI del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, o bien en el recurso de revisión, en que las autoridades demandadas deben justificar sus argumentos.

Al respecto, tiene aplicación por analogía la tesis aislada identificada con el registro digital número 2024671, undécima época, publicada el veinte de mayo de dos mil veintidós, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente:

PRINCIPIO DE EVENTUALIDAD. SU CONCEPTO Y ALCANCE EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES.

Hechos: La quejosa promovió juicio de amparo directo en contra de una sentencia dictada por una Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; seguidos los trámites legales, se le concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Posteriormente interpuso un nuevo juicio de amparo directo contra la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria del amparo anterior, impugnando la constitucionalidad de la normativa aplicada, sin haberla cuestionado en el momento procesal oportuno.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el principio de eventualidad consiste en la carga procesal que tienen las partes en un proceso jurisdiccional para hacer valer y aportar en la fase procesal oportuna todos los medios de ataque y de defensa, incluso ad cautelam, so pena de que concluya o se clausure el ejercicio de su derecho.

Justificación: Lo anterior, porque dicho principio busca la oportunidad, el orden, la claridad y rapidez en la marcha de cualquier proceso jurisdiccional; por tanto, su objetivo es agrupar todas las defensas o ataques que posean las partes para dar celeridad y definitividad al proceso. Asimismo, tiene como fundamento la premisa de que el proceso jurisdiccional se construye por un conjunto de etapas concatenadas y organizadas entre sí, de forma que cuando se cierra una de ellas, ya no es factible retroceder y volver a ésta, pues precisamente con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a las partes y firmeza a cualquier proceso jurisdiccional, la ley establece los tiempos que permiten a las partes aportar y hacer valer, en la fase procesal oportuna, todos los medios de ataque y defensa, incluso ad cautelam, so pena de que concluya o se clausure el ejercicio de su derecho.

Además, el hecho de que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantice a los Municipios el régimen de libre administración de la hacienda pública; y que de conformidad con el artículo 178 fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los Ayuntamientos tengan facultad de proponer a las legislaturas las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, no es suficiente para justificar la legalidad del acto impugnado, toda vez que al materializarse mediante su emisión, debe cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica, y las formalidades esenciales del procedimiento previstas por las normas aplicables, independientemente de su finalidad.

En el caso particular, mediante la sentencia definitiva, específicamente en el considerando TERCERO, la juzgadora primaria determinó que los actos impugnados no se respetó la garantía de legalidad jurídica, en virtud que carecen

de los requisitos de fundamentación y motivación que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 138 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, toda vez que la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, no citó los preceptos legales que sirvieron de base para emitir el acto impugnado, no el procedimiento para determinar las cantidades que se señalan en el acto impugnado que hoy se impugna.

Además, el efecto de la sentencia definitiva no vulnera los criterios jurídicos de determinación del crédito fiscal, contenidos en la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en razón de que ésta no debe aplicarse hasta en tanto no se modifique la base gravable de los predios, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, y requisitos de fundamentación y motivación.

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en el artículo 190 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativos del Estado de Guerrero, ante la ineficacia de los agravios del recurso de revisión en estudio, lo procedente es confirmar la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, emitida por la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número TJA/SRA/II/377/2021.

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 190 y 218 fracción VIII del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado número 467, es de resolverse y se;

RESUELVE

PRIMERO. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por el representante autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión, a que se contrae el toca TJA/SS/REV/400/2022.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en el expediente número TJA/SRA/II/377/2021.

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrada Presidenta en suplencia de la Magistrada Presidenta Titular DRA. MARTHA ELENE ARCE GARCÍA, por ausencia temporal aprobada en sesión de pleno de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA, MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA y VICTOR ARELLANO APARICIO, Magistrado habilitado en la misma sesión por la razón antes expuesta, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.-----

**MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA
GODINEZ VIVEROS.**
MAGISTRADA PRESIDENTA SUPLENTE.

DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA.
MAGISTRADO.

MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.
MAGISTRADA.

LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA.
MAGISTRADO.

LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO.
MAGISTRADO HABILITADO

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO.
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS.

TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/400/2022.
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/II/377/2021.